



GEOPOLÍTICA Y ANTITERRORISMO EN LAS AMÉRICAS

Fernando Jiménez Sánchez

San Diego, California EEUU.

La llegada de Donald Trump ha significado un cambio en las políticas de seguridad, en las que la geopolítica se mezcla con la política antiterrorista para enfrentar las amenazas en el continente americano. Esta política se está instrumentalizando en diferentes escalas, siendo las últimas semanas las de mayor actividad militar en el Caribe, con posibilidades de extenderse al territorio de Venezuela.

Los intereses geopolíticos de Estados Unidos son relativamente claros, aunque no así los instrumentos para asegurarlos. La agenda MAGA coloca el proyecto programático e ideológico por encima del papel estabilizador que tradicionalmente ha desempeñado a nivel internacional EEUU. La visión de “Estados Unidos primero” ha implicado un repliegue en algunos de los asuntos en los que ejercía liderazgo, conforme a una estrategia pragmática e ideológica.

La política antiterrorista, que apenas comienza a conocerse en América Latina —pese a los 24 años que lleva activa y refinándose—, ha empezado a aplicarse contra algunas de las organizaciones criminales transnacionales latinoamericanas y a actores estatales o gubernamentales —algunos autoritarios y con ideologías de extrema izquierda—, en donde se intersectan con los intereses geopolíticos y anticriminales de Estados Unidos.

Los 24 años de experiencia antiterrorista en más de diez países muestran que las intervenciones militares generan un gran costo económico y humano para Estados Unidos y sus socios (OTAN). En raras ocasiones producen seguridad, no fortalecen a las naciones intervenidas, ni crean instituciones o desarrollan los derechos humanos conforme a los valores occidentales y, en teoría, universales. Tampoco estas intervenciones dejan grandes beneficios económicos ni son disuasivas en otros contextos.

La experiencia antiterrorista también demuestra que el aislamiento de actores estatales e internacionales, la eliminación de líderes y operadores clave (preferiblemente a distancia), la interrupción de los sistemas de pago para impedir el financiamiento, los ataques aleatorios, la inteligencia anticipatoria y la vigilancia electrónica, los controles fronterizos y de movilidad, las detenciones preventivas, el desmantelamiento de redes logísticas y la contrapropaganda resulta eficiente y funcional.



El uso del antiterrorismo contra actores criminales transnacionales y para resolver asuntos geopolíticos puede ser de utilidad, pese a la confusión que genera. Las grandes herramientas del antiterrorismo —la excepcionalidad, la supremacía legal y la secrecía— pueden ayudar a superar las barreras nacionales, regionales e internacionales que limitan el uso de la fuerza. El marco antiterrorista, al ser secreto, hace posible que bajo la sospecha se eliminen blancos y se evite el debido proceso en cualquiera de sus formas, así como el respeto a los derechos humanos.

La experiencia indica que, con relativa facilidad, pueden localizarse y eliminarse los actores clave del terrorismo; evitar que las instituciones de los Estados los protejan; impedir que se les apoye desde el extranjero, se financien o difundan impunemente la ideología que utilizan para sustentar la violencia. Es una política que aísla, disminuye y elimina al enemigo con la aplicación de instrumentos secretos en todos los espacios en los que se encuentre.

La estrategia de Trump, hasta el momento, tiene tres etapas en América Latina.

La primera, la mexicana, inició con la designación de su frontera sur como espacio de emergencia nacional y con la clasificación de las organizaciones criminales transnacionales como terroristas. Con ello logró transferir la responsabilidad de gestionar las migraciones a México y disminuirlas prácticamente a cero; instaurar una renovada política contra la criminalidad en México para reducir el tráfico de fentanilo y aumentar sus capacidades de vigilancia en territorio mexicano e internacional, así como la cooperación entre ambas naciones.

La segunda, la venezolana, se apoya en la designación como terroristas de las organizaciones criminales

Recomendación estratégica

El gobierno mexicano deberá buscar los mayores beneficios anticriminales que ofrece el marco antiterrorista. La disposición de la administración Trump para disminuir las capacidades de las organizaciones criminales puede representar una oportunidad estratégica para la nación. Por ello, México debe mantener y ampliar la cooperación bilateral orientada a reducir el poder y control del crimen organizado, así como evitar que dichos esfuerzos sean boicoteados por el antiamericanismo, el nacionalismo o los apoyos internos a gobiernos autoritarios contra los que Estados Unidos se encuentra en confrontación.



transnacionales vinculadas con el socialista Nicolás Maduro y, por lo tanto, en su designación como terrorista, además del despliegue de las Fuerzas Armadas en aguas internacionales y el ataque a embarcaciones marítimas. Esta etapa, se dirige a propiciar un cambio político para derrocar al autoritario Nicolás Maduro y su élite gobernante, que acarrea una serie de agravios contra la población venezolana y exporta su ideología, genera desestabilización en las demás naciones latinoamericanas e impide el desarrollo de la región.

La tercera etapa, la colombiana, parte de los diferendos entre el presidente Trump y Gustavo Petro sobre la política antiterrorista, migratoria y contracriminal, el despliegue militar y las presiones a Venezuela. Lo que ha llevado al rompimiento de relaciones, la cancelación de la visa de Petro y su inclusión en la lista Clinton por vínculos con el narcotráfico.

Las siguientes etapas, si estuvieran planeadas, posiblemente seguirán la misma lógica: gobiernos autoritarios latinoamericanos con capacidad de desestabilizar la región, que desafían la ideología, los intereses geopolíticos y los objetivos anticriminales o antiterroristas de la administración del presidente Donald Trump. Cuba, Bolivia y Nicaragua, podrían ser los blancos de la siguiente etapa.

Último momento

La visita del senador con licencia Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, a la Franja de Gaza ha generado un amplio debate en México. Los motivos del viaje a una zona inmersa en un conflicto tan serio y complejo quedaron opacados por el aparente desconocimiento del legislador sobre la situación y por las dudas de la opinión pública ante los excesos y abusos en el uso de recursos públicos por parte de algunos representantes populares. A su regreso, su visión de izquierda revolucionaria sobre el conflicto probablemente obligará, una vez más, a la presidenta a explicar la posición oficial de su gobierno y será de utilidad para los actores interesados en erosionar la relación México-EEUU

Escucha **Informe Estratégico** en





PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
CONSULTORES EN INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

Fernando Jiménez Sánchez

Es colaborador del CIS Pensamiento Estratégico; investigador SECIHTI-El Colegio de Jalisco; Fellow en el Center for U.S.-Mexican Studies de la Universidades de California en San Diego; coordinador del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana, GTISM, de El Colegio de Jalisco; miembro del Consejo Ciudadano de Seguridad de Jalisco; del SNII-1 y del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia de la UNAM. Comentarista del Podcast Informe Estratégico; Doctor por la Universidad Carlos III de Madrid, Maestro por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la UNAM.



Síguelo en @fjimsan

Servicios CIS Pensamiento Estratégico

